

Introducción

La historia nunca contada

Satoko Kishimoto y Olivier Petitjean

No sería de extrañar, especialmente si vive en Europa, que opine que los servicios públicos son, por su propia naturaleza, caros, poco eficientes, incluso algo obsoletos, y que reformarlos para adaptarlos a los nuevos retos de nuestra época representa una tarea ardua. Parece lógico dar por sentado —porque eso es lo que nos dicen la mayoría de los políticos, los medios de comunicación y los llamados ‘expertos’— que nosotros y nosotras, en tanto que ciudadanos y usuarios, debemos resignarnos a pagar unas tarifas cada vez más altas por unos servicios de una calidad cada vez más baja, y que al personal de esos servicios no le queda otra salida que aceptar unas condiciones laborales cada vez más precarias. Da la impresión de que las compañías privadas irán asumiendo un papel cada vez más destacado en la prestación de servicios públicos, porque todo tiene un precio, porque la clase política ha perdido de vista el bien común y porque a los ciudadanos solo les preocupan sus intereses particulares.

En este libro, sin embargo, se explica una historia totalmente distinta. A veces, da la sensación de que vivimos en una época donde los únicos horizontes que se dibujan son los del lucro y la austeridad. Pero en realidad, al margen del foco mediático, miles de políticos, funcionarios públicos, trabajadores y sindicatos, y movimientos sociales están trabajando para reivindicar o crear servicios públicos eficaces que satisfagan las necesidades básicas de las personas y respondan a nuestros desafíos sociales, ambientales y climáticos. Normalmente, lo hacen en el ámbito local. Nuestro estudio demuestra que en los últimos años se han producido al menos 835 casos de (re)municipalización de los servicios públicos en todo el mundo, algunos de los cuales aglutinan a varias ciudades. En total, hemos identificado iniciativas remunicipalizadoras en más de 1600 ciudades de 45 países. Y estas (re)municipalizaciones, por lo general, logran rebajar los costes y las tarifas, mejorar las condiciones laborales y mejorar la calidad

del servicio, garantizando al mismo tiempo una mayor transparencia y mecanismos de rendición de cuentas.

Esta ola remunicipalizadora¹ es especialmente intensa en Europa, pero está cobrando impulso en otras regiones del mundo. Y lo que es más: muchos de los 835 ejemplos que hemos identificado no constituyen un mero cambio técnico en la titularidad, sino que suelen entrañar reformas económicas, sociales y ambientales más amplias. Las iniciativas de (re) municipalización responden a muchos y diversos motivos, desde acabar con las prácticas abusivas o el incumplimiento de las normas laborales por parte del sector privado al deseo de reconquistar el control de la economía y los recursos locales, el afán de ofrecer a las personas unos servicios asequibles, o la intención de poner en práctica unas estrategias ambiciosas a favor del medioambiente o de la transición energética, por citar algunos. Las (re)municipalizaciones se producen en todos los niveles, siguiendo distintos modelos de propiedad pública y con distintos grados de implicación por parte de la ciudadanía y la propia plantilla del servicio. Sin embargo, pese a la gran pluralidad de experiencias, se dibuja un panorama con un denominador común: el movimiento (re)municipalizador está creciendo y expandiéndose, a pesar de la constante ofensiva a favor de las privatizaciones y las medidas de austeridad.

La remunicipalización alude al hecho de retornar el carácter público a la prestación privada de un servicio. Más en concreto, la remunicipalización supone que los servicios públicos pasen de la privatización en cualquiera de sus diversas formas —como la propiedad privada de los activos, la externalización de los servicios y las asociaciones público-privadas (APP)— a la propiedad pública, la gestión pública y el control democrático. Aunque nuestro estudio pone el acento en los casos en que se ha retomado la plena titularidad pública, también incluye casos de servicios de propiedad principalmente pública cuando el modelo se aplica con claros valores públicos, para servir objetivos públicos y cuando comprende algún elemento de responsabilidad democrática.

Las remunicipalizaciones más allá del sector del agua

Nos pareció que era fundamental estudiar y documentar la tendencia remunicipalizadora, precisamente porque las instituciones de conocimiento, los centros de estudios y las instituciones financieras dotadas de los recursos necesarios no han hecho nada para investigarla. Las grandes empresas, los ‘expertos’ en economía y los Gobiernos nacionales han ignorado las remunicipalizaciones; quizá porque no tienen interés en que se conozcan. Preferirían que se perpetúe la idea de que la privatización es algo inevitable. En 2015, un grupo de organizaciones de la sociedad civil y sindicatos emprendimos una iniciativa común para estudiar las remunicipalizaciones en el sector del agua. Descubrimos que, desde el año 2000, se habían producido al menos 235 casos de remunicipalización del agua en 37 países, que afectaban a más de 100 millones de personas.² La remunicipalización del agua, un suceso poco habitual hace apenas 15 años, se ha acelerado de forma espectacular y la tendencia cobra cada vez más fuerza. A raíz de aquí, se nos planteó la cuestión de hasta qué punto se estaba produciendo el fenómeno también en el ámbito de otros servicios esenciales, como la energía, la recogida de residuos, el transporte, la educación, la salud y los servicios sociales. También sentíamos curiosidad por saber si la remunicipalización en estos sectores respondía a motivos parecidos a los del sector del agua y si estaba logrando los mismos resultados.

Metodología del estudio

Obviamente, la lista de remunicipalizaciones que presentamos en este libro dista mucho de ser exhaustiva. Se trata, simplemente, de un primer hito; seguiremos documentando nuevos casos. La lista es fruto del esfuerzo concertado de varias organizaciones de la sociedad civil, investigadores y sindicatos para reunir casos de (re)municipalización en un gran número de países, como parte de un proceso de aprendizaje colectivo. Once organizaciones iniciaron un proyecto de colaboración y recopilación de datos durante un período de 18 meses. Trece personas se encargaron

de la investigación documental. Con el fin de ampliar nuestro alcance y localizar casos que aún no eran conocidos a escala internacional, distribuimos una encuesta participativa entre sindicatos y redes de la sociedad civil. La Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP-EPSU) difundió el cuestionario de la encuesta entre sus organizaciones afiliadas y recibimos información considerable de 19 sindicatos en 16 países. Estas aportaciones nos ayudaron a identificar casi 100 nuevos casos.

La metodología que empleamos en el estudio se explica con mayor detalle en el anexo 3. Nuestra lista no incluye los casos en los que un servicio que se había remunicipalizado se ha vuelto a privatizar, ni en los que un contrato ha pasado de un proveedor privado a otro, ya que quedan fuera del alcance de nuestra investigación.

Una tendencia dinámica y cada vez más veloz

Gracias a la encuesta participativa y a nuestra propia investigación, identificamos 835 casos de (re)municipalización en siete sectores de servicios públicos en todo el mundo. Son casos que encontramos en todo tipo de contextos, desde pequeños pueblos a grandes capitales, y en entornos tanto urbanos como rurales. La mayoría de las experiencias de remunicipalización se presentan en los sectores de la energía (311 casos) y del agua (267 casos). En varios países, como Canadá, el Estado español y el Reino Unido, las autoridades locales han asumido el control de diversos servicios, como piscinas, comedores escolares, mantenimiento del espacio público, vivienda, limpieza y seguridad (14,0 casos en total).

En torno al 90 por ciento de las (re)municipalizaciones en el sector de la energía tuvieron lugar en Alemania (284 casos), un país famoso por su ambiciosa política de transición energética (conocida como *Energiewende*). Muchas experiencias de remunicipalización del agua han tenido lugar en Francia (106 casos), el país con la historia más larga de privatización en este sector y donde tienen su sede las grandes multinacionales Suez y Veolia. En los sectores de la salud y la asistencia social, más de la mitad de

los casos proceden de Noruega y otros países nórdicos (37 casos en total).

Nuestro estudio abarca iniciativas (re)municipalizadoras que se produjeron en un lapso de 16 años, entre 2000 y enero de 2017. En la primera mitad de este período (2000-2008), se registró el 17 por ciento de los casos y, en la segunda (2009-2017), el 83 por ciento.³ Esto significa que, durante la segunda mitad de nuestro período de estudio, se produjeron cinco veces más (re)municipalizaciones que durante el primero. El año en que se dieron más casos, un total de 97, fue 2012; desde entonces, el número de experiencias se ha mantenido elevado. En el caso concreto del agua, durante la segunda mitad de nuestro período de estudio, se produjeron 2,3 veces más (re)municipalizaciones que durante el primero. La remunicipalización del agua tiene una historia de mayor recorrido, y es probable que las buenas experiencias en este sector hayan sido una fuente de inspiración para acabar con las privatizaciones en otros sectores en los últimos años.

Aparte del período que cubre la encuesta, existen numerosos ejemplos de que la tendencia remunicipalizadora se mantiene con fuerza en 2017. La ciudad catalana de Cabrils remunicipalizó el mantenimiento de los espacios públicos y los servicios de limpieza y, en los próximos años, prevé remunicipalizar un total del 90 por ciento de los puestos de trabajo, que antes estaban subcontratados. La ciudad española de Cádiz también dejó de externalizar el servicio de socorristas en las playas y la limpieza de edificios públicos, unas medidas que representan solo el principio de todo un plan del gobierno municipal para reestructurar los servicios.

Distintos modelos de desprivatización

Usamos el término '(re)municipalización', con paréntesis, porque la encuesta también incluye iniciativas en las que las administraciones locales establecieron nuevas empresas municipales en mercados liberalizados. Así ha sucedido, sobre todo, en el sector de la energía. Las administraciones locales también pueden crear servicios públicos totalmente nuevos

para satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía. Por ejemplo, el estado indio de Tamil Nadu creó comedores populares con el propósito de ofrecer comida a un coste muy bajo y, de este modo, reducir los índices de hambre y desnutrición (véase el capítulo 6). En total, nuestra encuesta identificó 143 nuevas empresas municipales o regionales establecidas para suministrar servicios públicos. La gran mayoría de ellas son empresas municipales de energía (122). Según nuestra encuesta, solo en Alemania, se han creado 109 nuevas empresas municipales de energía en los últimos años. Hay también otros ejemplos, como algunas empresas municipales de servicios funerarios en el Estado español y Austria, que pueden ofrecer a las familias una alternativa asequible en un momento crítico para la dignidad de las personas.

La desprivatización también puede adoptar la forma de una (re)nacionalización. La remunicipalización y la renacionalización muchas veces comparten características comunes en la medida en que ambas entrañan que las administraciones públicas retomen unas funciones que antes dependían del sector privado, pero los motivos que las impulsan pueden ser de lo más variado. Por ejemplo, en Europa occidental, después de la crisis financiera de 2008, se rescataron y recapitalizaron muchos bancos privados con fondos públicos. En Japón, tras la catástrofe nuclear de Fukushima en 2011, también se nacionalizó la Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO), que era la responsable del reactor nuclear. El Gobierno japonés tiene la intención de volverla a privatizar cuando el mercado esté preparado para ello. En Hungría, el actual régimen autoritario ha renacionalizado más de 200 servicios, sobre todo en los sectores de las finanzas y la energía, con el objetivo de consolidar el poder central.⁴ Estos ejemplos tienen más que ver con encontrar una solución temporal a un problema del sector privado sin introducir mecanismos de escrutinio público o con planteamientos nacionalistas. Por otro lado, en América Latina, pasada la oleada de privatizaciones de muchos servicios públicos en la década de 1990, varios Gobiernos renacionalizaron sectores estratégicos desde el punto de vista social y económico, como la energía, el gas, el agua, los fondos de pensiones, el servicio postal y el transporte aéreo. Por lo tan-

to, presentamos una lista selectiva de casos de renacionalización, cuyos objetivos y motivos consistían en fomentar unos servicios equitativos y asequibles que lleguen a toda la población. Estos casos se encuentran, sobre todo, en América Latina (véase el capítulo 2).

Nuestro estudio se centra primordialmente en las medidas adoptadas con el objetivo de promover la capacidad local y con el potencial de suministrar unos servicios públicos mejores y democráticos. Aunque el 70 por ciento de las experiencias (589) han estado encabezadas por autoridades locales y regionales, algunas también se han coordinado a escala intermunicipal. La mitad de los casos del sector del agua en Francia, por ejemplo, se han producido en este plano. De este modo, los municipios circundantes de un área metropolitana se unen para beneficiarse de los servicios remunicipalizados de gestión pública del agua, como sucedió en la ciudad francesa de Niza. Las iniciativas intermunicipales también son algo habitual en el sector de la energía (148 casos) y del transporte (19 casos).

Cómo se acaba con las privatizaciones

En nuestra encuesta, también analizamos cómo se desprivatizaron los servicios en 662 casos de (re)municipalización. En el 67 por ciento de los casos (445), los gobiernos locales y regionales aprovecharon la oportunidad de que el contrato vencía y, simplemente, se limitaron a no renovarlo y dejar de apostar por la prestación privada. Es comprensible que los gobiernos locales esperen hasta el momento en que vence el contrato para evitar conflictos con las empresas privadas. Destinar unos años a prepararse para la etapa de transición mientras se espera a que se extinga el contrato del sector privado es un elemento estratégico para los municipios. En el 20 por ciento de los casos (134), el contrato privado se rescindió mientras seguía vigente, una medida que suele ser mucho más difícil de tomar y que, normalmente, resulta conflictiva. El índice de rescisión de los contratos es relativamente alto en el sector del agua (35 por ciento) y del transporte (26 por ciento). Esto podría significar que los gobiernos locales tomaron medidas firmes para hacer frente a los contratistas pri-

vados, a pesar de que ello podría tener graves consecuencias económicas ya que, en caso de rescisión unilateral de un contrato, puede que las empresas exijan una indemnización, entre otras cosas por la pérdida de los beneficios previstos en el futuro. En estos casos, parece que los problemas que causaba el modelo privatizado eran demasiado acentuados como para esperar a que finalizara el plazo del contrato. En el sector de la energía, solo hemos detectado la rescisión de tres contratos. Este hecho podría ser reflejo del gran poder que ostentan las grandes compañías energéticas, que no están dispuestas a dejar que las administraciones locales adopten esta medida. En todo caso, cuando finaliza el plazo del contrato es un momento estratégico para que los gobiernos locales recuperen el control de los servicios públicos. En el resto de los casos (46), las compañías privadas vendieron sus acciones o se retiraron por voluntad propia, por motivos diversos.

Un mandato de mayor alcance, pero menos recursos

Los servicios públicos se enfrentan a un reto polifacético. La mayoría de los países siguen luchando por recuperarse de la crisis económica. Los Gobiernos neoliberales se aferran obstinadamente a la estrategia de reforzar la austeridad e intensificar la competencia y la presión sobre las normativas ambientales y sociales a través de los acuerdos neoliberales de comercio e inversión. Evitar un cambio climático catastrófico exige una transformación profunda de la economía. El acceso universal a servicios esenciales como el agua y el saneamiento sigue siendo un gran reto en todo el mundo. Se ha denunciado y revelado la escandalosa elusión y evasión fiscal que practican grandes empresas y personas multimillonarias, pero los Gobiernos siguen permitiendo que esta realidad se mantenga. A las administraciones locales y regionales se les pide que hagan más con menos recursos. Estas administraciones se encuentran en la primera línea de batalla de numerosos retos, como el cambio climático, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, la creación de resiliencia frente a catástrofes naturales y la acogida de personas refugiadas. Al mismo tiempo, se enfrentan a un desafío titánico en lo que

se refiere a cómo financiar las infraestructuras y los servicios públicos.

Durante décadas, se nos ha dicho que las externalizaciones, las privatizaciones, las asociaciones público-privadas y los sistemas de financiación, como las iniciativas de financiación privada en el Reino Unido, son las únicas opciones de las que disponen las autoridades locales en un contexto caracterizado por más obligaciones y menos recursos. Sin embargo, cada vez hay más pruebas de que ese tipo de políticas son perjudiciales en el largo plazo para los presupuestos públicos, y que acaban desembocando en servicios deficientes y en una pérdida de responsabilidad democrática. Y cada vez es más evidente que abandonar las externalizaciones, las asociaciones público-privadas y otras políticas neoliberales parecidas, y optar en su lugar por la prestación interna de los servicios públicos genera, como veremos a continuación, ahorros importantes. El creciente número de iniciativas remunicipalizadoras, que son el principal punto de interés de este libro, es un reflejo del fracaso de las privatizaciones y las asociaciones público-privadas.

Los beneficios inmediatos de las desprivatizaciones

En el estudio sobre remunicipalizaciones en el sector del agua que realizamos en 2015, detectamos que los principales motivos para acabar con la privatización de un servicio estaban vinculados con el ahorro de los costes, la mejora de la calidad, la transparencia financiera y la recuperación de la capacidad y el control operativos. En esta encuesta más amplia, que incorpora otros servicios esenciales además del agua, encontramos los mismos motivos. Otros factores clave son los objetivos ambientales, como acelerar el desarrollo de energías renovables, las medidas ambientales integradas para reducir los residuos o mejorar los sistemas de transporte público. La prestación de servicios asequibles para los hogares de bajos ingresos en el contexto de la pobreza energética y de agua (por el que muchas familias no pueden pagar las altas facturas del servicio) es también un motivo importante, especialmente en el Estado español y el Reino Unido, donde esos servicios están dominados por grandes compañías comerciales.

En lo que se refiere a los resultados de la remunicipalización, en 2015 hallamos que un gran número de los casos se tradujo en un ahorro de los costes y en una mayor inversión en el sector del agua. Puede que aún sea demasiado pronto para evaluar de manera sistemática los resultados de las (re)municipalizaciones en otros sectores, ya que muchos casos se han producido en los últimos años. Sin embargo, existen pruebas empíricas significativas de otros sectores que apuntan a que la remunicipalización ha supuesto un ahorro de costes inmediato para los gobiernos locales. Por mencionar solo algunos ejemplos (ya que estos se analizan con mayor detalle en los distintos capítulos y en la Conclusión), la ciudad de Bergen, en Noruega, que retomó la gestión de dos centros para el cuidado de personas mayores, logró un superávit de 500 000 euros, incluso aunque se habían previsto unas pérdidas de un millón de euros (véase el capítulo 4). La rescisión de las asociaciones público-privadas de transporte en Londres ayudó a reducir los costes en 1000 millones de libras esterlinas, sobre todo gracias a la eliminación de los dividendos de los accionistas y los gastos jurídicos, y a la introducción de medidas de eficiencia en las adquisiciones y el mantenimiento (véase el capítulo 9). Chiclana, en el Estado español, asumió la contratación municipal de 200 trabajadores y trabajadoras de tres servicios públicos y, aún así, el municipio prevé que ahorrará entre un 16 y un 21 por ciento de su presupuesto.

La ciudadanía apuesta por las desprivatizaciones

Muchas de las iniciativas remunicipalizadoras tienen su origen en unos dinámicos movimientos ciudadanos. La transición energética en Alemania es promovida por municipios y grupos ciudadanos; la mayoría de la población del Reino Unido exige que el agua, el suministro de energía y el transporte sean de titularidad pública; la fuerte resistencia popular contra los recortes sociales provocó la eclosión de una nueva política progresista en los municipios del Estado español, y más de 2300 ciudades de toda Europa se mostraron contrarias al acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos y la UE (el acuerdo TTIP). Todas estas historias nos dicen que las vías alternativas que buscan poner freno a la expansión de

las privatizaciones, la austeridad creciente y el constante deterioro de la calidad de los servicios públicos gozan de un firme apoyo.

En una gran mayoría de los casos documentados por nuestra encuesta, la ciudadanía y el personal del servicio se ha implicado en distintos grados en los procesos de desprivatización. En los países nórdicos, los trabajadores organizados experimentaron problemas en el lugar de trabajo después de que se privatizaran ciertos servicios, y presionaron por que se desprivatizara el trabajo en el ámbito social y de la salud. Lo mismo ocurrió con varios servicios del gobierno local en el Reino Unido y Canadá. En estos países, varias plataformas de trabajadores y ciudadanos llevan muchos años luchando contra la privatización del agua y colaborando con los ayuntamientos para que, en cuanto surge la oportunidad política, estos desprivaticen los servicios. La organización de importantes campañas de base a favor de un referendo llevó a la desprivatización de la red energética en Hamburgo, Alemania (véase el capítulo 8), y en Boulder, Estados Unidos,⁵ y del agua en Berlín.⁶ Los ciudadanos y las ciudadanas no son meros usuarios de un servicio. Las nuevas empresas municipales de energía cuentan con el respaldo de una ciudadanía comprometida y de movimientos comunitarios. Los londinenses, por ejemplo, están haciendo campaña para que se cree una empresa de suministro de energía sin fines de lucro que cuente con un amplio mecanismo de participación ciudadana.⁷ La participación y la movilización ciudadanas representan un factor esencial del movimiento (re)municipalizador.

Modelos mixtos y desprivatizaciones desde abajo

Empleamos el término ‘público’ en un sentido deliberadamente amplio, ya que eso nos permite abarcar un mayor abanico de iniciativas. Por ejemplo, dentro de nuestro ámbito de investigación, entrarían las cooperativas ciudadanas que han ocupado el lugar que antes dominaban proveedores de servicios de energía de carácter puramente comercial y orientados a los beneficios (por ejemplo, Minnesota y la isla hawaiana de Kauai en los Estados Unidos).

A diferencia de las autoridades locales, las cooperativas ciudadanas y las asociaciones de vivienda que han contribuido a prestar unos servicios de energía asequibles son, en principio, entidades privadas y, como tales, solo deben responder ante sus propios integrantes. No obstante, también suelen ser entidades sin ánimo de lucro y es evidente que pueden atender a objetivos de interés público. Por ese motivo, la perspectiva más importante de este estudio no es tan solo la distinción entre actores estatales y no estatales, sino los objetivos que persiguen las iniciativas y otros factores, como la proximidad (es decir, que se hayan impulsado desde el plano local). En otras palabras, confrontamos los modelos de propiedad corporativa y financierizada y los modelos de propiedad sin fines de lucro, organizadas a escala local y que persiguen de forma explícita servir el interés público general, basándose en principios como la igualdad, el acceso universal, la sostenibilidad ambiental y la democracia. Por ejemplo, Our Power, una empresa que fue creada en 2015 en la ciudad escocesa de Glasgow por parte de 35 asociaciones de vivienda social, es un modelo mixto de asociación entre autoridades locales y cooperativas ciudadanas. El Gobierno escocés ha invertido 2,5 millones de libras en la empresa, que aspira a que las cosas sean distintas para los hogares de bajos ingresos que actualmente se encuentran en situación de desventaja en el mercado de la energía y que tienen problemas para pagar las facturas.

Diversidad de contextos nacionales y dinámicas sectoriales

Dibujar un panorama de las iniciativas desprivatizadoras constituye un auténtico desafío, ya que se están produciendo de distintas formas y cada país tiene una legislación y contexto específicos. Ante tal desafío, nuestra estrategia consiste en presentar diez capítulos que destacan algunos de los casos documentados de diferentes países y sectores. Ocho de los capítulos han sido escritos por investigadores que se dedicaron a la recopilación de datos, y otros dos por colaboradores invitados, con la idea de mejorar la solidez de nuestro análisis. Los capítulos centrados en países y dedicados a Francia, la India, el Reino Unido y Noruega tratan sobre

cómo se produjo la remunicipalización en los respectivos países. Dos capítulos examinan el sector del agua en Cataluña y el sector de la energía en Alemania: ambos esbozan la importancia estratégica de reorganizar estos sectores de forma que abandonen el modelo de extracción de los recursos y afán de lucro y tiendan hacia modelos públicos democráticos y sostenibles. El capítulo sobre América Latina nos recuerda lo importantes que son los procesos de renacionalización para garantizar unos servicios equitativos y universales.

Tres capítulos analizan algunos temas transversales en las experiencias desprivatizadoras y que resultan relevantes para todos los sectores y países. El primero aborda qué significa la remunicipalización para el personal de los servicios, y cómo les pueden beneficiar las iniciativas de remunicipalización. El segundo se centra en la creciente amenaza que plantean los regímenes internacionales de comercio e inversión, y en especial los mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS) que contemplan los principales tratados. En este capítulo se demuestra que el ISDS representa un obstáculo para las remunicipalizaciones y que limitaría de manera significativa el margen normativo democrático que necesitan las administraciones locales y regionales para revertir el modelo privado de prestación de servicios. La tercera cuestión transversal se discute en el último capítulo, que se posiciona en contra las asociaciones público-privadas y el espejismo de asequibilidad que transmiten a las autoridades públicas, y que advierte a responsables de políticas y a la ciudadanía sobre los costes ocultos y los pasivos contingentes.

Extrayendo lecciones y desafíos de cada capítulo, la conclusión ofrece una imagen clara de cómo las ciudades y las personas están pasando a la acción para recuperar el control democrático de su vida cotidiana y los recursos locales, y alejarse del modelo que solo busca maximizar los beneficios empresariales. Presentamos estrategias para construir alianzas más fuertes y más amplias en favor de las desprivatizaciones y la recuperación de los servicios públicos. A través de esta labor colectiva, deseamos fomentar un debate más profundo sobre las características que debería

tener una futura generación de modelos de propiedad pública y las estrategias impulsadas por la ciudadanía para organizar los servicios públicos de forma más democrática y eficiente.

Consideramos que la (re)municipalización representa un marco estratégico para lograr cambios positivos en nuestras comunidades y ayudar a conectar distintos movimientos y actores: los que promueven la justicia climática y la transición energética, los que luchan contra los regímenes neoliberales de comercio e inversión y las privatizaciones, los que denuncian la elusión fiscal, los movimientos sindicales y sus aliados en favor de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, el emergente movimiento municipalista y otras alianzas entre ciudades. El creciente poder colectivo de todos estos grupos a la hora de reivindicar unos servicios públicos democráticos vuelve a situar en el horizonte a unas comunidades llenas de vida y resiliencia.



Satoko Kishimoto es coordinadora del proyecto Alternativas Públicas del Transnational Institute (TNI).



Olivier Petitjean es un escritor e investigador francés que actualmente trabaja como redactor del Observatorio de las Multinacionales, una plataforma digital dedicada a investigar las actividades de las transnacionales francesas.

Notas

- 1 Empleamos el término 'remunicipalización' para aludir al proceso por el que se recupera el control y la gestión públicos a escala local de servicios que antes estaban privatizados o se prestaban de forma privada. Somos conscientes de que no siempre es el término más adecuado, ya que, en algunos casos, los servicios recuperados siempre han estado en manos privadas o, simplemente, no existían. En estos casos, sería más apropiado hablar de 'municipalización'. El término '(re)municipalización' abarcaría ambos casos. Se encuentran también ejemplos de servicios públicos que se han desprivatizado a nivel nacional. Estas 'renacionalizaciones' o 'restatalizaciones' las tratamos por separado, con el fin de centrarnos en las acciones locales y también porque algunas formas de renacionalización (cuando entrañan, por ejemplo, centralizar el poder o rescatar de forma temporal una compañía privada que ha quebrado) no entran en el ámbito de nuestra investigación. Por último, encontramos numerosos ejemplos en los que ciudadanos y usuarios están tomando la iniciativa y recuperando servicios esenciales que antes prestaban entidades comerciales para gestionarlos sin ánimo de lucro y en pro de sus comunidades. Desde nuestra perspectiva, estos casos también podrían catalogarse como una (re)municipalización, en la medida en que comparten valores de servicio público y objetivos no comerciales. El término 'desprivatización' se usa para aludir, en general, a la (re)municipalización, la renacionalización y las iniciativas ciudadanas para recuperar los servicios, que persiguen, en última instancia, acabar con los problemas de las privatizaciones.
- 2 Kishimoto, S., Petitjean, O., Lobina, E. (eds.) (2015) *Our Public Water Future: Global Experiences with Remunicipalisation*. Amsterdam: Transnational Institute. <https://www.tni.org/en/publication/our-public-water-future>
- 3 Cinco de los casos no presentan datos con respecto a los años.
- 4 Mihályi, P. (2016) *Diszkriminatív, piac- és versenyellenes állami gazdaságpolitika Magyarországon, 2010–2015* (Políticas discriminatorias contra el mercado y contra la competencia en Hungría, 2010–2015). IEHAS Discussion Papers, MT-DP - 2016/7, Academia de Ciencias de Hungría.
- 5 Véase en detalle el caso de Boulder en el sitio web de Democracia Energética: Buxton, N. (2016) *La larga lucha de Boulder por la energía local*. <http://es.energy-democracy.net/?p=364>
- 6 Véase en detalle el caso de Berlín en Remunicipalisation Tracker: http://www.remunicipalisation.org/#case_Berlin
- 7 Véase en detalle el caso de Londres en el sitio web de Democracia Energética (2016): <http://es.energy-democracy.net/?p=355>